

Nuevo procedimiento de Uruguay para las Evaluaciones de Impacto Ambiental en Actividades Antárticas

Resumen

Uruguay ha definido un procedimiento nacional para evaluar los impactos ambientales de las actividades realizadas en el Área del Tratado Antártico, conforme al Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente y su Anexo I.

El nuevo procedimiento contempla los tres niveles de evaluación –preliminar, inicial y global– aplicables de acuerdo con la magnitud de los impactos previstos. Todas las actividades del Programa Nacional Antártico deben iniciar con una Evaluación Preliminar.

Este procedimiento involucra a diferentes instituciones: el Instituto Antártico Uruguayo (IAU), a través de la Dirección de Coordinación Científica y Gestión Ambiental (DICGA), como coordinador técnico; y el Ministerio de Ambiente como autoridad competente para la aprobación final, modificando el mapa de actores nacionales en relación a los procesos de evaluación y aprobación.

Finalmente, el sistema incorpora programas de seguimiento que verifican los impactos reales y permiten ajustar las medidas de mitigación cuando es necesario. Con lo cual, Uruguay refuerza su compromiso con la protección del medio ambiente antártico y con el cumplimiento de las disposiciones del Sistema del Tratado Antártico.

cientifica@iau.gub.uy

Desarrollo

De acuerdo con el Tratado Antártico, el Protocolo sobre Protección del Medio Ambiente y su Anexo I, toda actividad que se lleve a cabo al sur de los 60° de latitud sur debe considerar sus impactos ambientales antes de su inicio, conforme a los procedimientos nacionales aplicables.

En este marco, Uruguay definió un procedimiento nacional para la evaluación ambiental de las actividades del Programa Nacional Antártico (PNA), conforme a la legislación nacional.

Los roles de los actores institucionales se ajustaron a sus competencias, de tal manera que el Instituto Antártico Uruguayo (IAU) actúa como administrador del PNA, en coordinación con el Gabinete Interministerial en Asuntos Antárticos (GIMAA), que establece los lineamientos políticos. La Dirección de Coordinación Científica y Gestión Ambiental (DICGA) del IAU es responsable de coordinar los procesos de evaluación ambiental. Mientras que el Ministerio de Ambiente (MA) es la autoridad competente para otorgar la aprobación final de las evaluaciones ambientales, lo que redefine y fortalece el rol de los actores nacionales en esta materia.

El Protocolo distingue tres niveles de impacto: menor que mínimo o transitorio; no mayor que mínimo o transitorio; y mayor que mínimo o transitorio. A cada nivel se le asocia un tipo de evaluación correspondiente, Evaluación Medioambiental Preliminar (EMP), Evaluación Medioambiental Preliminar Inicial (EMI) y Evaluación Medioambiental Preliminar Global (EMG).

En todos los casos, la DICGA coordina el proceso junto al proponente de la actividad y determina el nivel de evaluación requerido. El MA resuelve sobre la autorización ambiental en las EMI y EMG, y en el caso de la EMG el procedimiento incluye consulta pública y a las Partes del Tratado.

El procedimiento incorpora programas de seguimiento ambiental, en línea con el artículo 3 del Protocolo. Estos permiten verificar los impactos reales de las actividades y ajustar, en caso necesario, las medidas de mitigación.

Con este sistema, Uruguay asegura que todas las actividades de su Programa Nacional Antártico se realicen en estricta conformidad con el Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente y la normativa nacional, reafirmando su compromiso con la protección del medio ambiente antártico y con los principios del Sistema del Tratado Antártico.